



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021)

RADICADO:	11001-33-35-026-2020-00281-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	JOSE ANTONIO TORRES CIFUENTES
DEMANDADA:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL

Dentro del presente asunto, el abogado **WILMER YACKSON PEÑA SÁNCHEZ**, presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en representación de la señora **JOSE ANTONIO TORRES CIFUENTES**, ello con la finalidad de que se declare la nulidad del acto administrativo 20183111931851 y se declare la existencia del acto ficto o presunto frente a la petición con radicado 5HYBLP514X, con relación al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%, y el reconocimiento y pago de la prima de actividad.

Ahora bien, este despacho observa que no es posible admitir la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, se debe recordar que, a través del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

De la misma manera, y a través del Decreto 417 de 2020, el Gobierno Nacional adoptó varias medidas encaminadas a garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, la continuidad de los servicios de justicia prestados por entidades del ejecutivo y de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional a través del decreto 806 del 4 de junio de 2020, adoptó las medidas necesarias para la implementación del uso de las tecnologías de la información y las

comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizando de esa manera, el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria. Ello, con el fin de garantizar que los sujetos procesales puedan cumplir con los actos procesales que se interrumpieron o no se pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales, el ejercicio de los derechos y de la misma manera, se evite la aglomeración de personas en los despachos y centros de servicio judiciales, una vez fuera levantada la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo tanto, y dando aplicación a lo establecido por la ley 1437 de 2011, el Decreto 806 de 2020 y la ley 2080 de 2020, este despacho judicial **INADMITIRÁ** LA DEMANDA, por las siguientes razones:

1. Del derecho de postulación.

El Capítulo I de este ordenamiento, consagra lo aspectos relativos a la capacidad, representación y ejercicio del derecho de postulación, sobre este último aspecto el artículo 160 dispuso:

***“Artículo 160. Derecho de postulación.** Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.*

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo.”

Ahora bien, como quiera que el C.P.A.C.A., no consagra lo relativo a la formalidad que deben cumplir los poderes que se presenten ante esta jurisdicción, se hace necesario acudir a la Ley 1564 de 2012 para estudiar este derrotero, ello en aplicación de la remisión que consagra el art. 306 de la Ley 1437 de 2011 al Código de Procedimiento Civil, hoy Cogido General del Proceso.

En tal virtud, el artículo 74 del C.G.P., en materia de otorgamiento de poder a los profesionales del derecho para actuar en procesos judiciales, estableció:

***“Artículo 74. Poderes.** Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.*

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. (...)

(Negrillas del Despacho).

De igual forma, mediante el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, respecto a los poderes a conferir dentro de este nuevo sistema de tecnologías, estableció:

“Artículo 5. Poderes. *Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. (...)”*

Dicho lo anterior, se informa que en lo allegado por el apoderado, no se vislumbra poder conferido, razón por la cual, el Profesional del Derecho, deberá allegar dicho documento cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley 1437 de 2011, en el que se deberá determinar e identificar claramente el acto administrativo susceptible del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. De la dirección de notificaciones judiciales.

El artículo sexto del decreto 806 de 2020, señala:

“Artículo 6. Demanda. *La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda”.*

De igual manera, el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, modificó el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, señalando:

“Artículo 35. *Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”

Al tenor de lo dispuesto en la norma, encuentra el Despacho que, en el ítem de notificaciones de la demanda, el apoderado judicial no registró el canal digital del demandante y en ese sentido no se cumple a cabalidad con lo establecido en la norma antes endiligada.

Por ende, se deberá indicar el **canal digital y/o correo electrónico** de notificaciones, en donde la demandante, directa y efectivamente, podrá recibir notificaciones judiciales, sin que pueda ser la misma del apoderado.

Teniendo en cuenta lo anterior, en aplicación al artículo 35 de la norma antes señalada, el apoderado judicial deberá afirmar bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes.

3. Acreditación de envío de copia de la demanda y sus anexos:

Se informa que mediante el artículo 6 del Decreto 806 de 2020, se dispuso que:

“(…) En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. (…)

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado”.

Subraye fuera del texto original.

Consecutivamente, el artículo 162 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, indica frente al contenido de la demanda:

“Artículo 35. Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado”.

Por lo anterior, se informa que no se evidencia correo o documento alguno que demuestre que cumplió con el artículo 6 del Decreto 806 de 2020 y el

numeral 8 del artículo 35 la Ley 2080 de 2021, por lo tanto, se hace menester que demuestre dicho requisito en el tiempo establecido para la subsanación.

4. De los actos administrativos demandados

Ahora bien, cuando se pretende la nulidad del acto producto del silencio de la administración, se hace indispensable traer con la demanda copia de las peticiones que fueron elevadas a la entidad, y que no fueron contestadas, ello para determinar la existencia del acto a demandar.

Así las cosas, se establece que la parte demandante pretende lo siguiente:

“PRETENSIONES PRINCIPALES:

1.1. Que se declare la nulidad del acto administrativo: 20183111931851: MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 8 de octubre de 2018.

1.2. Se declare la existencia del silencio administrativo negativo, como consecuencia de ello, el acto ficto o presunto, por medio del cual se niega el reconocimiento de la diferencia salarial del 20%, y el reconocimiento y pago de la prima de actividad a JOSÉ ANTONIO TORRES CIFUENTES identificado C.C. 71.065.220 de La Mesa, por el derecho de petición con el radicado 5HYBLP514X.

1.3. Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto, producto del silencio administrativo negativo, por medio del cual se niega el reconocimiento de la diferencia salarial del 20 y el reconocimiento y pago de la prima de actividad a JOSÉ ANTONIO TORRES CIFUENTES identificado C.C. 71.065.220 de La Mesa, por el derecho de petición con el radicado 5HYBLP514X.”

Conforme lo anterior, la parte actora solicita que se declare la existencia de un acto ficto presunto negativo en consideración al silencio de la administración frente a la petición por este elevada ante el Ejército Nacional, sin embargo, y una vez revisado el plenario, este Despacho Judicial da cuenta que dicha entidad dio contestación a la petición radicada por el actor el día 8 de octubre de 2018, a través del radicado **20183111931851: MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10**, acto que de igual forma, está siendo demandado para declarar su nulidad.

Al respecto, la Ley 1437 de 2011, señala en su artículo 83, en qué situaciones se configura el silencio administrativo negativo:

“ARTÍCULO 83. SILENCIO NEGATIVO. *Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.*

En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto

presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.”

Es decir, el requisito indispensable para que el silencio administrativo ocurra, es **no haberse proferido una decisión que resuelva lo solicitado en una petición**, luego de transcurrido un plazo de tres meses, o más dependiendo del tiempo con que cuente la administración para dar contestación.

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el silencio administrativo se configura “*cuando transcurre un determinado tiempo y la Administración no manifiesta su voluntad respecto de una solicitud en particular, de forma definitiva*”, y es este momento a partir del cual nace a la vida jurídica, el acto administrativo ficto o presunto, siendo esta ficción jurídica la que debe ser demandada.

Contrario a ello, no puede considerarse que existe silencio administrativo respecto de la petición elevada, cuando el Ejército Nacional realizó pronunciamiento alguno a través del **Radicado 20183111931851: MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 8 de octubre de 2018**, y que éste mismo sea igualmente el acto ficto o presunto a demandar, pues estos actos administrativos son excluyentes entre sí, ya que el acto expreso no permite que se de paso a la configuración del silencio administrativo y con ello al acto ficto o presunto.

De acuerdo con lo anterior, y como quiera que dentro del presente asunto **no existe silencio administrativo** respecto del **Ejército Nacional** teniendo en cuenta la respuesta suministrada por el ente a través del **Radicado 20183111931851: MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 8 de octubre de 2018**, el Apoderado Judicial de la parte actora deberá adecuar las pretensiones de la demanda de conformidad con lo manifestado en esta providencia, exponiendo de manera adecuada las pretensiones a estudiar en el presente asunto.

Así las cosas, la demanda presentada por el apoderado judicial de la actora no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 2012, Decreto 806 de 2020 y Ley 2080 de 2020, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO.- INADMITIR LA DEMANDA promovida por el señor **JOSE ANTONIO TORRES CIFUENTES** en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL**.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

TERCERO.- Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá llegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AJR



Firmado Por:

Andres Jose Quintero Gnecco

Juez Circuito

Sala 026 Contencioso Admsección 2

Juzgado Administrativo

Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6a9e46d217b579233d9f347750cdc319e08f54b4d4861acbf4a2081fa36ab454**

Documento generado en 27/07/2021 12:22:40 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>